



RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: TEEA-RAP-002/2021.

PROMOVENTE: C. Ángel Martín Ortega Garibay, representante propietario del Partido del Trabajo.

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

MAGISTRADA PONENTE: Claudia Eloisa Díaz de León González.

SECRETARIO DE ESTUDIO: Néstor Enrique Rivera López.

Aguascalientes, Aguascalientes, a veintiséis de enero de dos mil veintiuno.

Sentencia que definitiva, por la que se confirma el acuerdo CG-A-04/21, en lo que fue materia de impugnación, dictado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

GLOSARIO

PT: Partido del Trabajo.

Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

Tribunal: Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes.

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TEPJF: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

IEE: Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

CG: Consejo General del IEE.

Acuerdo CG-A-04/21: Acuerdo mediante el cual se aprueba la distribución del financiamiento público estatal a los Partidos Políticos para su gasto ordinario y actividades específicas correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, así como para gastos de campaña del proceso electoral concurrente ordinario 2020-2021; se establecen los montos de los límites a las aportaciones de financiamiento privado; y los correspondientes al tres por ciento del financiamiento ordinario de los partidos políticos, a destinar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Aguascalientes.

Constitución Federal: Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

LGPP: Ley General de Partidos Políticos.

LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

1. ANTECEDENTES. Los hechos ocurrieron en 2021, salvo precisión diversa.

1.1 Inicio del Proceso Electoral. El día tres de noviembre del año dos mil veinte, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral se realizó la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021 en el estado de Aguascalientes, para la renovación del Congreso del Estado y de los once Ayuntamientos que conforman la entidad.

1.2 Presupuesto de Egresos. En fecha veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes edición extraordinaria en su segunda sección, tomo XXI, Núm. 58, el Decreto número 445, emitido por la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, del que se desprende el artículo 9° fracción IV.1. inciso b) en el cual se establece que corresponde la cantidad de \$75'937,500 (SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) para financiamiento público a partidos políticos.

1.3 Distribución del financiamiento público estatal a los Partidos Políticos. En fecha doce de enero, el IEE emitió el *“ACUERDO MEDIANTE EL CUAL APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA SU GASTO ORDINARIO Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, ASÍ COMO PARA GASTOS DE CAMPAÑA DEL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE ORDINARIO 2020-2021; SE ESTABLECEN LOS MONTOS DE LOS LÍMITES A LAS APORTACIONES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO; Y LOS CORRESPONDIENTES AL TRES POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO ORDINARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, A DESTINAR PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES”*.

1.4 Interposición de Recurso. Inconforme con las determinaciones del acuerdo CG-A-04/21, en fecha dieciséis de enero, el Partido del Trabajo interpuso Recurso de



Apelación, al considerar que *se aplica el criterio de no asignarle financiamiento público para gasto ordinario.*

1.5 Recepción y turno de recurso de apelación. El día veintiuno de enero, se recibió en este Tribunal el expediente relativo al Recurso de Apelación que nos ocupa, y por acuerdo de Presidencia del Tribunal Electoral, se turnó a la ponencia a cargo de la Magistrada Claudia Eloisa Díaz de León González.

1.6 Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la Magistrada instructora, radicó el expediente, admitió el juicio, declaró cerrada la instrucción y ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente.

2. COMPETENCIA. En términos de los artículos 297, fracción II, 335, fracción II, 336 y 337 del Código Electoral, este Tribunal Electoral es competente para resolver el Recurso de Apelación interpuesto, al haber sido promovido por el representante del PT ante el CG, en contra del acuerdo dictado por la autoridad responsable.

3. PROCEDENCIA. El Recurso de Apelación cumple con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 302 del Código Electoral:

a) Forma. La demanda fue presentada por escrito, se identifica el acto impugnado, denuncia los hechos y agravios en los que se basa el recurso, los preceptos presuntamente violados, así como el nombre y firma autógrafa de la promovente.

b) Oportunidad. El recurso se interpuso en el plazo legal previsto en el artículo 301 del Código Electoral, es decir, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la emisión del acto combatido.

c) Legitimación y Personería. El recurso de apelación fue promovido por el C. Ángel Martín Ortega Garibay, como representante propietario del Partido del Trabajo ante el CG, calidad que tiene debidamente acreditada.

d) Interés Jurídico. El promovente, tiene interés jurídico para promover el recurso de apelación, pues la resolución controvertida recae en la distribución del financiamiento público estatal al partido político que representa, por lo que, con independencia de que le asista o no la razón en cuanto al fondo de la controversia, se cumple con el requisito de procedencia para su estudio.

e) Definitividad. Se colma tal requisito ya que, dentro del Código Electoral no se prevé medio de impugnación diverso por el que previamente se pueda combatir el acto que se impugna.

4. TERCEROS INTERESADOS. De las constancias que obran en autos, no se advierte comparecencia de tercero interesado alguno.

5. AGRAVIOS. A fin de señalar de manera general los agravios que hace valer el promovente, se hace una síntesis de los mismos, sin que ello constituya una transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad, pues tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate derivados de la demanda o del escrito de expresión de agravios, se estudian y se les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis.

En ese sentido, es importante retomar lo que ha determinado la Sala de la SCJN en cuanto a la transcripción de los mismos, jurisprudencia número 2ª./J.58/2010, de rubro: **CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN¹.**

Bajo ese entendimiento, el promovente se inconforma de la legalidad del Acuerdo CG-A-04/21, dictado por el CG, señalando que vulnera lo previsto en los artículos 1, 9, 14, 16, 41, 116 fracción IV de la Constitución Federal, así como los artículos 1, 3, 23 de la LGPP por las siguientes razones:

- Señala que, el acuerdo controvertido vulnera y transgrede de manera directa el derecho constitucional del PT a recibir financiamiento público para gasto ordinario, porque a su consideración, la autoridad responsable adoptó un criterio que difiere con el previsto en los artículos 41 y 116 fracción IV de la Constitución Federal en relación a los diversos 1, 9, 14, 16 y 41, así como los artículos 1,3 y 23 de la LGPP.

¹ Jurisprudencia 2a./J. 58/2010. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Consultable en la URL: <https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralIV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=164618&Semanao=0>



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

- El promovente manifiesta que la autoridad responsable establece de forma errónea que el hecho de haber obtenido en la última elección de ayuntamientos el 2.61% de la votación válida emitida, se constituye en la razón por la que al PT no se le otorga financiamiento público para gasto ordinario, decisión que resulta inconstitucional y carente de jerarquía normativa.
- Señala, que la autoridad responsable debió tomar como referencia para la asignación del financiamiento, el porcentaje de votos obtenidos de la elección de diputados inmediata anterior, *“en lugar de aplicar de manera lisa y llana el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos.”*
- Manifiesta que de aplicarse el artículo 52 numeral 1 de la LGPP en el sentido lo hace el CG, se estaría privando de eficacia jurídica a todos y cada uno de los votos que de manera válida y constitucional emitieron los hidrocalidos a favor de los partidos políticos en la elección de diputados que se celebró en el 2018, con lo cual, se estaría transgrediendo el principio de efectividad e igualdad del sufragio contemplado en el artículo 41 de la Constitución Federal.
- Solicita la inaplicación del artículo 31 y 33 fracción IV del Código, pues en su lógica, resulta viable por considerar que el contenido es contrario a las bases establecidas en el artículo 41 y 116 de la Constitución Federal.
- Además, expone que el CG al momento de la distribución del financiamiento público local en el estado de Aguascalientes para gasto ordinario, debió administrar las disposiciones normativas, aplicando el principio pro persona, tomando en consideración la última votación que se obtuvo en la elección de diputaciones locales, en la cual el PT obtuvo el 3.24% de la votación válida emitida.
- Se duele de que la determinación de negar financiamiento público a un partido político con base en el artículo 31 y 33 fracción IV del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, se traduce en la afectación directa del derecho humano de asociación en materia política de los militantes que lo integran, y que, por lo tanto, se debe declarar la inaplicación de tales preceptos normativos.
- El promovente, señala que el acuerdo impugnado vulnera el *“principio de prevalencia del financiamiento público sobre el privado”*, esto en virtud de que, -en concepto del promovente-, *“si se niega de manera lisa y llana el financiamiento público*

[...], de manera automática no existiría posibilidad ni forma lógica o matemática posible de hacer que el financiamiento privado dado que al no existir el primero, no es posible tener el segundo en atención al principio de preminencia del financiamiento público”.

- Adicional de lo ya señalado, el PT señala que, en el acuerdo impugnado, se transgrede el principio de equidad al no haber una distribución igualitaria y proporcional en favor del partido que representan.

En virtud de lo anterior, los conceptos de agravios se analizarán en su conjunto, sin que ocasione perjuicio alguno al impugnante, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior en la jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro es: **"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"**, porque la forma de analizarlos, no es lo que puede originar una lesión, sino que lo esencial, es que todos sean estudiados.

6. FIJACIÓN DE LITIS. La litis a resolver consiste en determinar si la actuación del CG, al emitir el acuerdo CG-A-04/21, cumple con los principios de igualdad, equidad y legalidad.

7. METODOLOGÍA. A efecto de determinar la legalidad del acuerdo impugnado, el estudio se centra en cuanto al **acceso a las prerrogativas locales**, a fin de saber si se colman las condiciones constitucionales que los partidos deben cumplir para estar en posibilidad de ser partícipes del financiamiento público en la entidad, y posteriormente se analizará si los criterios emitidos por el CG son armónicos con el marco legal previsto por el legislador local.

8. ESTUDIO DE FONDO

8.1 Marco normativo.

Financiamiento público conforme a la Constitución Federal y la LGPP.

El artículo 41, Base I, de la *Constitución Federal* prevé que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.



Atento a lo anterior, el numeral 26, párrafo 1, de la *Ley de Partidos* establece que son prerrogativas de los partidos políticos:

- a) *Tener acceso a radio y televisión en los términos de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;*
- b) *Participar, en los términos de dicha Ley, del financiamiento público correspondiente para sus actividades.*
- c) *Gozar del régimen fiscal que se establece en esa Ley y en las leyes de la materia; y*
- d) *Usar franquicias postales y telegráficas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.*

Así, el financiamiento público a que tienen acceso los partidos políticos debe destinarse para el **sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, de carácter específico** y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

Ahora bien, de conformidad con los artículos 41, Base II, inciso a), de la *Constitución Federal* y 72, párrafo 2, de la *Ley de Partidos*, el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes debe ser aplicado única y exclusivamente para sufragar los gastos relacionados con la operación ordinaria del instituto político dentro o fuera de un proceso electoral, pues **se trata de erogaciones que tienen por objeto proporcionar un continuo mantenimiento integral a la estructura orgánica del partido**, a fin de conseguir una mayor vinculación con una ciudadanía cada vez más informada, crítica y participativa.

En tanto que el numeral 76 de la *Ley de Partidos* prevé que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades **tendientes a la obtención del voto** durante los procesos electorales, debe de aplicarse exclusivamente para solventar los gastos de campaña, dentro de los cuales no se encuentran comprendidos **los gastos que realicen los partidos para su operación ordinaria, para el cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.**

De ahí que, el propósito del financiamiento público para la obtención del voto es garantizar que todas las fuerzas políticas puedan acceder a los recursos necesarios para llegar al electorado, lo cual fomenta el pluralismo y ofrece a la ciudadanía la posibilidad de elegir entre un mayor número de opciones políticas y programas.

Este financiamiento favorece el fortalecimiento de los partidos políticos y los candidatos; asimismo, ofrece la oportunidad de competir en condiciones más equitativas, por lo que también guarda armonía con el fin que tienen los partidos de hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, toda vez que constituye la base para sufragar los gastos generados en las contiendas electorales.

De conformidad con los artículos 41, Base II, inciso c), Constitucional y 74 de la *Ley de Partidos*, el financiamiento público para el sostenimiento de **actividades de carácter específico** se enfoca concretamente a las relativas a educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales⁽⁴⁾ tendentes a fomentar la relación partido-ciudadanos, más allá del puro interés electoral, por lo que, al igual que el financiamiento para actividades ordinarias, está dirigido a promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática y a contribuir en la integración de órganos de representación política.

Bajo tales consideraciones, se advierte que en el sistema jurídico electoral mexicano existe una correlación entre los fines constitucionales de los partidos políticos y el tipo de financiamiento público que reciben como parte de sus prerrogativas.

Lo anterior resulta relevante si se considera que el financiamiento público constituye un elemento esencial para dotar de un mínimo de recursos a las organizaciones políticas, con la finalidad de mitigar las inequidades que puede generar el financiamiento privado; tan es así, que la *Constitución Federal* exige la prevalencia del financiamiento público sobre el privado.

Derecho de los partidos políticos nacionales a recibir financiamiento público local.

El artículo 116, fracción IV, inciso f), de la *Constitución Federal* prevé que el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales.

Por su parte, el inciso g) del artículo en cita establece, como principio rector en materia electoral, la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos, la cual



estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que realicen sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, atendiendo a sus propias circunstancias, a fin de que cada partido perciba lo que proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de representatividad.

En tanto que, el artículo 23, inciso d), de la *Ley de Partidos* dispone que los partidos políticos recibirán el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, de dicha Ley y demás leyes federales o locales aplicables. Asimismo, establece que en las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.

En consonancia, el artículo 52 de la LGPP establece en su párrafo 1° que para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el **proceso electoral local anterior** en la entidad federativa de que se trate, y en su párrafo 2 precisa que las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establecerán en las legislaciones locales respectivas.

Disposiciones locales en cuanto al financiamiento de los partidos políticos.

El artículo 31 del Código, señala que para que un partido político cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido el 3% de la Votación Válida Emitida en la elección de Gobernador, de diputados o de ayuntamientos **indistintamente, del proceso electoral local anterior.**

Asimismo, describe que los **partidos políticos nacionales** con registro local **que no hubiesen obtenido al menos el 3% por ciento** del total de la votación válida en la elección de **Gobernador, de diputados o de ayuntamientos indistintamente**, del proceso electoral anterior, **solo tendrán derecho a recibir el financiamiento correspondiente a sus gastos de campaña** durante los procesos electorales que participen.

8.2. Caso concreto. Del análisis de la pretensión final del promovente, que es la revocación del acuerdo impugnado por considerar que se adopta un criterio contrario a la constitución que priva de presupuesto ordinario al PT, este Tribunal advierte que

se encuentran similitudes con el relativo TEEA-RAP-020/2019, en donde el mismo partido, recurría un acuerdo del CG en el que se le priva de financiamiento público ordinario por no haber colmado lo dispuesto en la normativa para acceder a dicho financiamiento.

A saber, el PT recurrió en aquella ocasión por considerar que debía contemplarse para acceder al financiamiento público, la votación obtenida en el proceso electoral para la renovación del Congreso Local y no así la de Ayuntamientos.

En su momento, este Tribunal determinó que la decisión del CG fue apegada a derecho.

En ese sentido, en un contexto actualizado, se advierte que la situación jurídica no ha cambiado, pues no se han llevado a cabo nuevos procesos electorales que cambien la situación del recurrente, sin embargo, acorde con la jurisprudencia **12/2003** de rubro **COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARA SU EFICACIA REFLEJA**, la cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada.

Así, *“la cosa juzgada puede surtir efectos en otros procesos, de dos maneras distintas: La primera, que es la más conocida, se denomina **eficacia directa**, y opera cuando los citados elementos: sujetos, objeto y causa, resultan idénticos en las dos controversias de que se trate. La segunda es la **eficacia refleja**, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa; esto es, la tendencia es hacia la inexistencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios”*.²

Por tanto, se advierte que en el caso concreto existe identidad del sujeto, dado que en ambos medios de impugnación el que interviene como agraviado es el PT.

² <https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2003&tpoBusqueda=S&sWord=cosa,juzgad>



Además, respecto de la pretensión, en ambos medios de impugnación el actor solicita ante este órgano jurisdiccional la inaplicación de diversos artículos que versan sobre la distribución del financiamiento público.

Sin embargo, el objeto radica en un acto de autoridad diverso al ser una nueva actuación del CG la que se somete a la jurisdicción de este Tribunal.

Por lo tanto, el análisis de las pretensiones se hará a la luz de las disposiciones constitucionales, normativas y *de resultar aplicable*, las consideraciones vertidas en el asunto TEEA-RAP-020/2019 y acumulados, así como en el expediente SM-JRC-069/2019 y acumulados, en el cual la Sala Regional Monterrey confirmó lo resuelto por este Tribunal. Lo anterior en concordancia con lo establecido en la referida Jurisprudencia 12/2003.

a. Acceso a Prerrogativas Locales y Principio de Equidad. En la demanda, el promovente señala que el acuerdo impugnado le causa agravio al partido que representa porque la autoridad responsable aplica el criterio de no asignarle financiamiento público para su gasto ordinario vulnerando así el principio de equidad en la contienda.

Al respecto, este Tribunal considera que los agravios que hace valer el promovente son **infundados** por las siguientes consideraciones:

El promovente demanda la inaplicación del párrafo segundo del artículo 31 Código Electoral, así como la del artículo 52 de la Ley General De Partidos Políticos, porque violentan sus derechos al privarlo de financiamiento público, por lo que, en su consideración, provocaría un estado de inequidad en su participación política en la democracia local. Lo anterior, ante el hecho de que el PT obtuvo el 2.61 por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral pasado, y esto actualiza el supuesto del artículo 31, párrafo segundo, que lo priva de participar del financiamiento público ordinario.

En sus argumentos de disenso, el PT hace mención expresa que el IEE debió tomar en cuenta la última elección de diputados -en la cual obtuvo 3.24% de la votación válida emitida- a efecto de realizar la distribución del financiamiento.

Al respecto, es importante recordar que derivado de la reforma electoral de 2014, el transitorio segundo³ instruyó al Congreso de la Unión la expedición de la ley que regula a los Partidos Políticos. Así, tanto la Ley General de Partidos Políticos, como el Código Electoral son normativas emitidas acorde con la Constitución, que dotan de operatividad al sistema electoral, al posibilitar el acceso de los partidos a las prerrogativas necesarias para el cumplimiento de sus fines.

Así, la finalidad de la norma expresada por el legislador, es que los partidos políticos nacionales con acreditación local, al generar representatividad en la entidad, tengan la posibilidad de participar de los recursos financieros locales, por ende, cuando esto no sucede, la propia normativa prevé que la **representación nacional** del partido en cuestión, tiene el deber y la posibilidad de sustentar el funcionamiento del instituto políticos.

Acorde con lo anterior, el reglamento de fiscalización del INE, en los artículos 156 y 157, prevé las transferencias de recursos nacionales de los Partidos Políticos a los locales para las campañas estatales.

Por lo tanto, la petición de inaplicación, que implica también al articulado de la Ley General de Partidos Políticos, es imposible de atender por este Tribunal al ser una normativa de carácter federal que escapa de la competencia, *en cuanto a la inaplicación-*, de este órgano jurisdiccional.

En segundo término, también solicita la inaplicación de una porción normativa del Código, señalando que le causa agravio, pues lo excluye de la distribución del financiamiento público local.

En ese sentido, es oportuno advertir que los operadores de justicia no están obligados a realizar un estudio para la inaplicación de una norma, pues tal y como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes de inaplicar una norma, debe analizarse la procedencia o admisibilidad.

Las normas sobre la cual se pretende un estudio de constitucionalidad y su consecuente inaplicación, en este caso, es la contenida en el artículo 31 y 33 fracción IV del Código, al considerar que:

³ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Reforma en materia Político-Electoral 2014, Transitorio Segundo, Pág. 262. Para consulta en la URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

“su contenido es contrario a las bases establecidas en el artículo 41 y 116 de la Constitución Federal pues las disposiciones normativas antes señaladas establecen que para obtener financiamiento público para gastos ordinarios se debe de obtener el 3% de la votación emitida para la elección de diputados inmediata anterior, mas sin embargo en la legislación electoral de Aguascalientes se señala para obtener financiamiento público se debe de obtener el 3% del total de la Votación Valida Emitida en el Estado en la elección de Gobernador, de diputados o de ayuntamientos indistintamente.”

Así, lo que el PT solicita es que se inaplique la norma y se le considere para la distribución del financiamiento público local tomando en consideración el porcentaje de votación que obtuvo en el proceso electoral para la elección de diputados, *proceso que fue anterior al último celebrado en la entidad*, pues a su juicio, la Constitución Federal mandata un marco de equidad e igualdad, por lo que excluirlo de la distribución sería contrario a lo ordenado en la misma.

En ese entendimiento, es necesario precisar que existen resoluciones de la Sala Superior⁴ y Acciones de Inconstitucionalidad⁵ que han determinado los criterios a seguir en cuanto a la interpretación de los artículos señalados por el PT, cuando se trata de la negativa a distribuir financiamiento local para gasto ordinario a partidos políticos nacionales en el caso de que en la última elección local no alcancen el 3% de la Votación Válida Emitida, resoluciones que ponen fin a la pretensión del PT.

La Sala Superior en los asuntos SUP-JRC-4/2017 y SUP-JRC-39/2017, así como la Acción de Inconstitucionalidad 40/2017, resuelta por la SCJN, determinaron que los Partidos Políticos NACIONALES, con acreditación local, *como es el caso del PT*, que no alcancen el umbral del tres por ciento de la votación válida en la última elección, no podrán **acceder** al financiamiento público local para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Luego entonces, de conformidad a lo establecido por el artículo 31 del Código, los partidos políticos nacionales *-en este caso el PT-* que no hayan obtenido el 3% por ciento del total de la votación válida en la **elección del proceso electoral anterior**, siendo esta una **elección de Ayuntamientos**, solo tendrán derecho a recibir el financiamiento correspondiente a sus gastos de campaña, prescindiendo de las prerrogativas ordinarias.

⁴ SUP-REC-1901/2018

⁵ Acción de Inconstitucionalidad 38/2017



Así, de la interpretación gramatical del referido numeral, se hace alusión al apoyo ciudadano o votación válida obtenido en el proceso electoral 2018-2019 en el cual se renovaron los once ayuntamientos que conforman el Estado de Aguascalientes.

Al respecto, el IEE dentro del acuerdo impugnado CG-A-04/21, determinó lo siguiente:

“PT y MC no obtuvieron al menos el tres por ciento de la V.V.E. del proceso electoral anterior, siendo así que se sitúan en el supuesto previsto por el segundo párrafo del artículo 31 del Código, razón por la cual recibirán financiamiento exclusivamente para gastos de campaña del presente Proceso Electoral Ordinario Concurrente 2020-2021”.

En esa inteligencia, la determinación del IEE es **correcta y apegada a la legalidad**, toda vez que el PT no obtuvo el porcentaje mínimo requerido por el Código, en el entendido que, su votación válida emitida del proceso electoral inmediato anterior fue de **2.61%**.

Por tanto, conforme a lo resuelto por la SCJN y el TEPJF, tenemos que las legislaciones locales tienen la libertad de configurar las reglas de distribución del financiamiento público local, por lo tanto, es válida la exigencia contenida relativa a la obtención del tres por ciento en la elección inmediata anterior -en este caso, la de Ayuntamientos- para los partidos políticos nacionales con acreditación local.

Esto es así, porque el régimen de distribución competencial incluido en la constitución y en la LGPP, faculta a las legislaturas locales para establecer las reglas de financiamiento de los partidos políticos nacionales en el ámbito local, por lo tanto, las reglas que aplican son las del Código.

Luego entonces, para que un partido político nacional tenga derecho a **acceder a financiamiento público local**, se debe tomar en cuenta el porcentaje que obtuvo en la elección inmediata anterior de conformidad con lo que dispuso el legislador.

Ahora bien, en relación con el agravio en el que el promovente señala que se vulnera el principio de equidad en cuanto al financiamiento público, como ha sido señalado por la Sala Regional Monterrey en el asunto SM-JRC-0069/2019⁶, estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que realicen sus actividades ordinarias

⁶ SM-JRC-0069/2019

permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, atendiendo a sus propias circunstancias, a fin de que cada partido perciba lo que proporcionalmente le corresponda, acorde con su grado de representatividad de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal.

Por lo tanto, la propia constitución mandata que la distribución igualitaria y proporcional es la que el legislador dispone, por lo que los recursos son justamente distribuidos en una lógica proporcional a la representatividad medida en porcentaje de votos obtenido en la última elección de diputados.

De ahí que, para que un partido político nacional cuente con recursos locales, debió haber obtenido por lo menos el 3% de la VVE en el proceso electoral local anterior. Por lo que resulta **infundado** el agravio relativo a la equidad en la contienda, pues como ya fue precisado, los partidos reciben proporcionalmente lo que les corresponde según su representatividad.

En consecuencia, con sustento en las acciones de inconstitucionalidad emitidas por la SCJN y criterios relevantes por parte de la Sala Superior, y ante la existencia de un marco normativo local dictado por el legislador local, los agravios en cuanto al acceso y la vulneración al principio de equidad son **infundados** y por lo tanto no es necesario realizar la ponderación y análisis de las normas de las que se pretende su inaplicación.

b. En cuanto al Principio de Preeminencia del Presupuesto Público sobre el Privado.

El promovente, se duele del acuerdo impugnado al señalar que se viola el *principio de prevalencia del presupuesto público sobre el privado*.

Al respecto, la SCJN en la **Tesis Jurisprudencial P./J. 12/2010**, establece que la razón fundamental de establecer la preeminencia del financiamiento público sobre el privado se sustenta en la preocupación social de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas electorales.

Si bien es cierto, los partidos políticos no pueden en manera alguna recibir un mayor porcentaje de financiamiento privado sobre el público, lo cierto es que el promovente parte de una premisa errónea, pues considera que el acuerdo le impide acceder a tal

financiamiento y que evidentemente al no contar con recursos locales, por lógica tampoco tendrá recursos privados.

Es errónea su premisa pues, en el acuerdo impugnado, se establecen que el partido político recurrente no tendrá acceso a las prerrogativas locales por las consideraciones ya analizadas, pero en cumplimiento con lo dispuesto en la legislación, sí se le está otorgando presupuesto para gastos de campaña, conforme lo mandatado por el artículo 34 en relación con el 31 primer párrafo del Código Electoral, dejando establecido en el considerando SEXTO del acuerdo impugnado, que el PT sí tiene participación en cuanto a recursos para gastos de Campaña, tal y como puede observarse en la siguiente inserción:

SEXTO. Partidos políticos con derecho a financiamiento público estatal. Que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, los rubros del financiamiento público estatal al que accederá cada uno de los partidos políticos para el ejercicio dos mil veintiuno serán los siguientes:

No.	Partido Político	Financiamiento		
		Ordinario	Gastos de Campaña	Actividades Específicas
1	PAN	Si	Si	Si
2	PRI	Si	Si	Si
3	PRD	Si ²⁰	Si	No
4	PT ²¹	No	Si	Si
5	PVEM	Si	Si	Si
6	MC ²²	No	Si	No
7	MORENA	Si	Si	Si
8	PLA	Si ²³	Si	Si ²⁴

De la misma manera, en el considerando NOVENO, apartado II, numeral 2, el CG determinó que el PT, al no alcanzar el 3% de la VVE en el proceso electoral local anterior inmediato, le corresponde el monto de \$338,000.04 (Trescientos Treinta y ocho mil pesos 74/100) como financiamiento para gastos de campaña en el proceso electoral local 2020-2021.

El promovente refiere el asunto SUP-JRC-004/2017, para sostener su argumentación en cuanto a que no puede un partido político dejar de recibir recursos locales, sin embargo, se advierte que parte de una interpretación incorrecta, pues en tal asunto aquél asunto, la litis versa sobre la negativa de cualquier forma de financiamiento público local, tanto para gasto ordinario, cómo de campaña y actividades específicas, por lo que la Sala Superior, emitió el fallo en beneficio del promovente, en el sentido de otorgarle justamente financiamiento para gastos de campaña.



Sin embargo, en el caso que nos ocupa, como ya fue precisado, el PT sí percibe financiamiento para gastos de campaña, por lo que es un supuesto distinto al establecido en el precedente.

Por lo tanto, el planteamiento es **ineficaz** porque el promovente basa su argumentación en una hipótesis que no es aplicable, toda vez que si bien es cierto, en ninguna manera puede el financiamiento privado superar al público, también lo es que **no** está quedando en estado de indefensión o insolvencia, pues como ya ha sido precisado, el partido político nacional puede ministrar recursos a la representación de su partido en la entidad y además, ha sido asignado un presupuesto para gastos de campaña.

Además, el actor plantea argumentos que versan en cuanto a la **distribución** del financiamiento local, lo cual, resulta ineficaz al no tener derecho de **acceder** al financiamiento público.

Esto es, **para acceder al supuesto de distribución de financiamiento, primero se tiene que tener derecho de acceder a este**, cuestión que solo se logra alcanzando el 3% de la votación en la última elección.

Bajo esa inteligencia, al resultar los agravios planteados por el PT **infundados** por una parte e **ineficaces** por cuanto hace al principio de prevalencia, este Tribunal advierte que la autoridad responsable sí atendió adecuadamente a las disposiciones normativas que el legislador local plasmó en el Código en armonía con la LGPP.

Así, en razón de todo lo anterior, lo que procede es **confirmar** el acuerdo impugnado.

9. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios del promovente por las consideraciones vertidas en esta resolución.

SEGUNDO. Se **confirma** el acuerdo **CG-A-04/21** emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de fecha doce de enero.

NOTIFÍQUESE como en derecho proceda y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, por unanimidad de votos de la Magistrada y Magistrados que lo integran, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA



CLAUDIA ELOISA DÍAZ DE LEÓN GONZÁLEZ

MAGISTRADA



**LAURA HORTENSIA
LLAMAS HERNÁNDEZ**

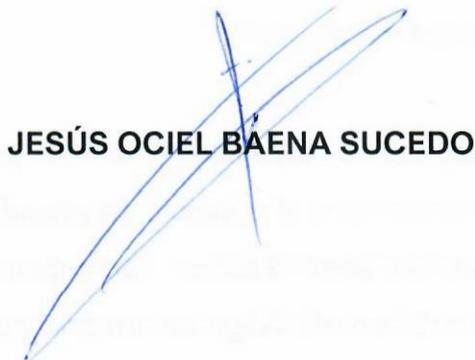
MAGISTRADO



**HÉCTOR SALVADOR
HERNÁNDEZ GALLEGOS**

18

SECRETARIO DE ACUERDOS



JESÚS OCIEL BAENA SUCEDO